

5. La educación en Haití

Del abandono al caos

Haití está en ruinas. Su sistema educativo se encuentra entre las instituciones más afectadas del país como consecuencia del reciente terremoto que dejó doscientos mil muertos y un vendaval de calamidad. La información que suministraron el gobierno local y las agencias internacionales da cuenta de la destrucción física de más de la mitad de los establecimientos educativos nacionales, la muerte de cientos de docentes y personal escolar, además de varios miles de alumnos y alumnas en todos los niveles del sistema. El Ministerio de Educación ha sufrido también severos daños y la pérdida de técnicos y administrativos que se desempeñaban en la gestión educativa.

El sistema escolar haitiano es la marca emblemática de una nación colapsada.

La educación de Haití está en ruinas. La ayuda internacional se apresta a brindarle condiciones para su reconstrucción. Los aportes de un importante número de agencias de cooperación, de gobiernos, organizaciones no gubernamentales, iglesias, movimientos sociales y universidades de todo el mundo son valiosos y movilizan lo que quizá sea el volumen más importante de recursos económicos representado por la ayuda externa ante una catástrofe. A pocos días de la tragedia, se estima que la comunidad internacional podría obtener cerca de 20 000 millones de dólares, percibidos de forma directa o indirecta. Sin embargo, se correrán grandes riesgos de fracaso y frustración, de prepotencia y arrogancia, si se desprecia o desconsidera la situación que vivía la educación nacional el día 11 de enero de 2010, víspera del terremoto que inauguró un nuevo capítulo de desolación y muerte en el país. Haití conoce esa prepotencia y esa

arrogancia internacional desde que tuvo la impertinencia de declarar su independencia de Francia, en 1804. Entender las condiciones que enfrentaba el sistema educativo haitiano antes del sismo tal vez pueda ayudar a que una de sus más probables réplicas deje de amenazar a su ya castigada población: el fracaso de nuevas promesas de bienestar que consumen millones de dólares y sepultan millones de ilusiones.

Después del terremoto, la educación haitiana se encuentra, como el país, en el más absoluto caos. Antes, estaba simplemente abandonada.

RAÍCES DEL ABANDONO

Así como el Haití de hoy parece estar condenado al olvido, su historia suele ser despreciada por quienes reducen los procesos históricos latinoamericanos a una sucesión de gestas heroicas comandadas por hombres ilustres. En este sentido, se ignora que fue la primera nación latinoamericana y caribeña en independizarse de un imperio colonial y la primera del mundo en abolir la esclavitud.

La algarabía del festejo bicentenario que invade los países de la región debería haber comenzado hace ya algunos años, cuando se cumplieron en Haití dos siglos de esa lucha por la libertad. Un acontecimiento que parece hoy, en cierta forma, incomprensible: un contingente de esclavos venció a las tropas de Napoleón Bonaparte y asentó en América Latina los principios del reconocimiento igualitario entre los miembros de una nación, virtud que casi todos los países del continente aceptaron formalmente sólo medio siglo después y Brasil, nada menos que ochenta y cuatro años más tarde.

La impertinencia les costó cara a los haitianos. Francia estableció severas sanciones económicas a su ex colonia e impuso el pago de 150 millones de francos-oro en concepto de reparaciones. Tratando de evitar que la insolencia haitiana se expandiera como la peste, los Estados Unidos, otra nación independiente, también le impusieron sanciones económicas y demoraron más de medio si-

glo en reconocer la legitimidad de su gobierno. La cifra del castigo quizá pierda dimensión en su perspectiva histórica. Bill Quigley (2010) recuerda que Francia vendió todo el territorio de Luisiana a los Estados Unidos por un poco más de la mitad de ese dinero: 80 millones de francos. Napoleón se deshizo así de una extensión territorial que superaba los dos millones de kilómetros cuadrados, donde actualmente están los estados de Arkansas, Misuri, Iowa, Oklahoma, Kansas, Nebraska, Minnesota y las Dakotas; en suma, la cuarta parte del actual territorio estadounidense, además de los estados de Alberta y Saskatchewan en Canadá. No debería sorprender que un territorio ochenta veces más grande que el de Haití costara la mitad del valor impuesto a la pequeña isla como pago por su dignidad. El poder colonial mide el valor de los escarmientos por su eficacia para infligir sufrimiento y penuria a los pueblos.

El castigo francés contra Haití constituiría hoy algo más de 21 000 millones de dólares, valor superior a toda la ayuda internacional que prometen, después del terremoto, países, organismos internacionales, iglesias, ONG, movimientos sociales, sindicatos y universidades. Se calcula que la deuda con Francia fue pagada finalmente poco antes de 1948, casi ciento cincuenta años después de la independencia.

Pero Haití no sólo fue el primer país autónomo, sin esclavitud y estructuralmente endeudado de América Latina y el Caribe: fue también el que tuvo la primera ley de educación obligatoria. Sabían esos esclavos impertinentes y valerosos que para librarse de la opresión había que dominar las herramientas del saber, construir escuelas y educar al pueblo para hacerlo soberano. Lo sabían e imaginaron un sistema educativo que se adelantó en varias décadas a los del resto de las Américas. Lo sabían y lo imaginaron, aunque las guerras internas y los delirios protoimperiales de quienes habían luchado por la independencia parecían conspirar contra esta posibilidad. Alexandre Pétion, uno de los artífices de la lucha anticolonialista y presidente entre 1807 y 1818, prometía escuelas para todos los hombres y mujeres libres de Haití. Sin embargo, al final de su gobierno, el país sólo contaba con dos escuelas de salud, un liceo y una escuela primaria para hombres (Louis,

2010).

A las limitaciones impuestas por la precoz deuda externa se le sumaría la persistente incapacidad de los gobiernos haitianos para hacer de sus horizontes de libertad una realidad efectiva. La inestabilidad política y las reyertas internas, que solían costarles la vida a los ocasionales gobernantes, impidieron edificar las bases de un sistema educativo universal y progresivamente democrático. Pasada la primera mitad del siglo XIX y luego de diez gobiernos de presidentes, reyes, emperadores y dictadores, la educación haitiana rozaba la insignificancia en comparación con la gesta de libertad que había significado el proceso de lucha anticolonial. Ya en 1860, bajo el gobierno de Fabre Nicolás Geffrard, el Estado haitiano firmó un tratado con la Iglesia católica para la creación y el desarrollo de escuelas en todo el país. Se iniciaría así el proceso de privatización del sistema educativo nacional, beneficiado por las ventajas ofrecidas al clero: promoción para la apertura de escuelas confesionales, donación de terrenos, subsidios para el pago de docentes y otros aportes que fueron definiendo la fisonomía de un sistema escolar atravesado por el crecimiento de las instituciones privadas y el abandono estatal, una característica que se mantiene hasta el presente.

La privatización del sistema educativo avanzó así de forma sostenida, aunque no los ideales universalistas que habían imaginado los padres de la patria. En el centenario de la independencia, de los trescientos cincuenta mil niños y niñas en edad escolar sólo un poco más de treinta mil asistían a una escuela pública o privada.

Un sistema educativo abandonado en un país que transitaba entre el naufragio y la opresión. Un país, para algunos, sin suerte.

LA POLÍTICA DEL ABANDONO

A comienzos del siglo XX, menos de la mitad de los niños y niñas haitianos asistían a la escuela.

Entre 1915 y 1934 el país fue ocupado por los Estados Unidos. Los motivos de tal arrebato fueron los que siempre esgrimen las

potencias coloniales para justificar sus atropellos. En este caso, además de profundizar el proceso de degradación económica que vivía el país, la ocupación significó un drenaje sistemático de recursos haitianos hacia sus invasores. Una verdadera expoliación que se garantizó mediante el control estadounidense de las aduanas, el cobro de impuestos y la depredación de todos los bienes rentables del país.

La ocupación trajo más daños que ventajas a la población haitiana, como suele ocurrir cada vez que el gobierno de los Estados Unidos decide fundar, de la mano de su ejército y su tecnocracia, el reino de la libertad y del progreso más allá de sus fronteras. El crecimiento del sistema educativo continuó a ritmo lento, agónico. La privatización escolar, por el contrario, a ritmo acelerado: ya en la segunda década del siglo XX era prácticamente irreversible. Como modesto aporte al futuro educativo del país, la ocupación estadounidense contribuyó a estructurar, en 1926, la Escuela de Medicina. Un minúsculo tributo a un país que, aún hoy, tiene una de las más bajas esperanzas de vida del mundo y cuya población arrastra, desde siempre, pésimas condiciones de salud. Nada nuevo bajo el sol del Caribe. Los Estados Unidos pasaron como un vendaval, se llevaron todo lo que de valor se interpuso en su camino, violaron derechos y dignidades y dejaron un par de placas de bronce que aspirarían a ocultar el brillo del sol con las manos. La educación haitiana le debe mucho menos a la ocupación estadounidense que lo que la comunidad educativa estadounidense de ayer y de hoy le debe a este pequeño y maltratado país. En 1934 terminaba la invasión estadounidense a Haití, aunque la ocupación se mantendría hasta nuestros días, con una permanente presencia e intervención militar en el país y con un ocasional, paternalista y casi siempre ineficaz aporte de recursos que, en el campo educativo, sólo sirvió para consolidar los procesos de privatización y el desprecio estatal por el derecho a la educación de todos los haitianos.

A mediados del siglo XX, Haití recibió ayuda estadounidense para “saldar” su deuda reparadora con Francia y, pocos años más tarde, en 1957, el nada despreciable soporte político que llevó a la dinastía Duvalier al gobierno de la nación y la mantuvo en el

poder hasta 1986. Dictadura brutal y sangrienta, corrupta y asesina, pero lo suficientemente útil y necesaria como para blindar de anticomunismo esa porción del mar Caribe, tan cerca del temido infierno cubano, tan lejos de los más elementales derechos humanos y del respeto a la vida. La dictadura de los Duvalier mató a millares de haitianos, multiplicó casi veinte veces la deuda externa, saqueó los cofres públicos incrementando la fortuna de la familia dictadora en más de 900 millones de dólares, empobreció y produjo, ante la indiferencia o la mirada cómplice de los gobiernos de algunas de las naciones más desarrolladas del mundo, el proceso de expropiación educativa más brutal que se hubiera conocido en el continente. Los Duvalier huyeron de Haití con millones de dólares en sus maletas y miles de muertos pegados en la suela de sus zapatos, y dejaron un sistema educativo que se transformaría en el más privatizado de la región.

No se trata de una paradoja, sino de una cruel evidencia: el país más pobre de las Américas, uno de los más miserables del mundo, es el que tiene el sistema escolar más privatizado en todo el continente, con el 90% de sus escuelas bajo el comando de iglesias, ONG o pequeños empresarios, que albergan más del 80% de la población escolar.

No se trata de una paradoja. Se trata de una política que hace del abandono y del desprecio por la dignidad humana su misión más valorable.

LA PERSISTENTE TRANSICIÓN DEL ABANDONO AL ABANDONO

Lo que siguió en la historia reciente de Haití puede no ser plenamente conocido, aunque puede sospecharse. La inestabilidad política y el conturbado escenario interno continuaron profundizándose. Una insurrección popular derrumbó finalmente la dinastía dictatorial en 1986, y Duvalier Jr. fue expulsado del país. (El Bébé Doc, como era internacionalmente conocido, se exilió en Francia, donde gozó de inmunidad y de los beneficios que le ofrecía la fortuna expropiada por él y por su padre al pueblo haitiano.) Asumió

el gobierno una junta militar comandada por un aspirante a dictador, Henry Mamphi, hasta que en enero de 1988, luego de un proceso electoral muy cuestionado, Leslie François Manigat se transformaría en el trigésimo sexto mandatario del país. Seis meses más tarde, haciendo honor a una estirpe militar tan frecuente en la región, Mamphi consideró que le volvía a tocar el turno de gobernar y derrocó al frágil Manigat. La ambición de Mamphi duró poco para él y mucho para los haitianos. Tres meses más tarde, el presidente de facto fue destituido por un conspirador profesional y, como no podía ser de otra forma, militar de carrera: Prosper Avril, quien se mantuvo en el poder durante un año y medio. Fue depuesto por otro militar, el general Hérard Abraham, comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, quien nombraría por primera vez a una mujer en la presidencia provisoria del país, Ertha Pascal Trouillot, jueza de la Corte de Casación y encargada de organizar las esperadas elecciones libres.

En diciembre de 1990, el pueblo haitiano votó. Jean-Bertrand Aristide se transformó así en el primer presidente democráticamente elegido, con un abrumador apoyo popular, ciento ochenta y seis años después de la independencia del primer país abolicionista del mundo. Aristide había sido un destacado sacerdote adepto a la Teología de la Liberación y, aunque consiguió escapar a varias tentativas de asesinato llevadas a cabo por bandas militares o paramilitares, no pudo evitar ser expulsado de la Orden Salesiana, que lo consideraba un estorbo, en 1988. Las perspectivas y esperanzas abiertas en Haití eran, sin lugar a dudas, enormes. Sin embargo, una vez más, los anhelos de felicidad duraron muy poco. A un mes de haber asumido la presidencia, el gobierno de Aristide sufrió la primera tentativa de golpe militar y, antes de concluir un año de mandato, fue destituido por Raoul Cedras. Heredero de toda la prepotencia militar ejercida antaño en el país, Cedras lideró la junta militar hasta 1994, con un triunvirato de marionetas que ejercieron alternadamente la presidencia durante este período: Joseph Nérette, Emile Jonassaint y Marc Bazin. Este último había sido funcionario del Banco Mundial y uno de los candidatos que había disputado las elecciones contra Aristide, con un amplio apoyo de los Estados Unidos por medio de la Na-

tional Endowment for Democracy (NED). En 1990, la truculenta NED, nacida gracias al apoyo del presidente Ronald Reagan en 1983 y cuya función real siempre ha sido la desestabilización de los gobiernos progresistas y democráticos en América Latina y el Caribe, había aportado a la campaña de Bazin la nada modesta ayuda de 40 millones de dólares. Pólvora en chimangos. El candidato obtuvo sólo el 12% de los votos. Meses más tarde, ejercería su destino histórico como bufón del régimen militar, hasta que, con la ayuda del propio gobierno estadounidense, Aristide regresaría a la presidencia en un contexto de gran inestabilidad y brutal violencia política. En 1995, se celebraron nuevas elecciones presidenciales, en las que resultó elegido por el 88% de los votos René García Préval, primer ministro y compañero de exilio del ex padre salesiano.

Los senderos de la política haitiana son sinuosos y complejos, demasiado empinados para quien aspira a transitarlos desde el llano y provisto apenas de una racionalidad lineal y previsible. Aristide volvió al poder en 2001, luego de unas muy cuestionadas elecciones nacionales, más cerca ahora de Cuba y Venezuela que de los Estados Unidos, más interesado en atender las demandas de las mayorías pobres y excluidas que en prestar atención a las exigencias de los tutores coloniales que siempre guiaron los rumbos del país. Sin embargo, no logró realizar nada de esto. La violencia política se extendió a niveles extremos. La crisis económica no dejó de profundizarse y los niveles de desigualdad y miseria se elevaron aún más. Una nueva conspiración volvería a gestarse. Si Aristide había vuelto del exilio con la ayuda estadounidense, con ayuda estadounidense sería desplazado del gobierno y del país en febrero de 2004. El presidente que alguna vez supo sembrar esperanzas marcharía a un nuevo destierro, esta vez a Sudáfrica, y dejaría un vendaval de muertos, rebeliones y enfrentamientos de bandas paramilitares y militares, policiales y parapoliciales, y una población indefensa y sometida a los más brutales atropellos. El país estaba en ruinas, como casi siempre durante el último siglo.

Asumió el poder Boniface Alexandre, juez de la Suprema Corte. El 30 de abril de ese mismo año, el Consejo de Seguridad

de la ONU estableció la Misión de Estabilización de las Naciones Unidas en Haití (MINUSTAH). En mayo de 2006, René García Prével volvió a asumir el debilitado gobierno. Desde entonces, las temporadas de ciclones de 2007 y 2008 azotaron la isla. Los huracanes Noel, Ike, Gustav y Hanna dejaron centenas de muertos. El 12 de enero de 2010, un apocalíptico terremoto destruyó doscientas mil vidas, buena parte de la ya precaria infraestructura nacional y casi todas las esperanzas de poder hacer de Haití una tierra de felicidad y bienestar para los haitianos. En una de sus desorientadas y estupefactas declaraciones públicas después de la tragedia, el presidente Prével sugirió que era mejor que sus conciudadanos abandonaran de una buena vez lo que quedaba del país.

¿Qué pasó con la educación en este período marcado por las dictaduras, las intervenciones externas e internas, la corrupción, la violencia y la miseria, la interminable, honda y dolorosa miseria propinada al pueblo haitiano?

Como mencionamos, la dictadura de Duvalier dejó una herencia de privatización educativa, brutal evidencia de su persistente violación a los derechos humanos, de la militarización del Estado y de la expropiación casi ilimitada de la riqueza nacional. Poco y nada hicieron para revertir esta tendencia las breves administraciones civiles de una democracia siempre tutelada y frágil. Ni siquiera consiguieron revertir las ofensivas de contrarreforma autoritaria que llevaron a cabo las intervenciones militares y el desgobierno de los poderes provisorios que se sucedieron en el país desde mediados de los años ochenta. Con la caída de Duvalier, lejos de consolidarse políticas públicas democráticas y generadoras de un mínimo bienestar para la mayoría de la población excluida, se profundizaron acciones orientadas a “liberalizar” la economía, privatizar los precarios servicios públicos existentes, reducir el gasto social y estimular “alianzas” con el sector privado para dotar al raquíptico Estado haitiano de mayor competitividad y dinamismo en la economía regional. Haití, prometían, podría transformarse en la Taiwán del Caribe. De esta forma, las mejoras necesarias en el campo social serían la consecuencia inevitable de la modernización económica, algo que, claro está, nunca

ocurrió.

Las políticas nacionales han sido más que limitadas para atender la significativa deuda social existente en el país. La ayuda externa ha navegado entre las recetas inocuas para revertir la crisis, el despilfarro, la corrupción y la inoperancia de la burocracia nacional, así como la ampliación de un endeudamiento externo que Haití conoce desde que tuvo la impertinencia de declarar su independencia, más de doscientos años atrás, y fue, como afirma Eduardo Galeano, “arrojada al basural, por eterno castigo de su dignidad”.

LA EDUCACIÓN EN EL ABISMO

El Censo Nacional de 2006 reveló las carencias de una población de 8,4 millones de personas, casi todas ellas en estado de pobreza extrema. Hoy, con casi diez millones de habitantes, Haití tiene indicadores sociales alarmantes que la posicionan entre las naciones más pobres y desiguales del planeta: altas tasas de mortalidad materna (quinientas veintitrés mujeres mueren por cada cien mil partos); uno de cada ocho niños muere antes de cumplir 5 años y uno de cada catorce, antes de cumplir 1 año; la esperanza de vida es de 59 años para los hombres y de 63 para las mujeres. La tasa de alfabetización de la población adulta no llega al 60% y la cantidad de niños que asiste a un establecimiento educativo no supera el 50%. Más de quinientos mil niños y niñas en edad escolar nunca pisaron una escuela.

La escasez de alimentos y el vaciamiento de la capacidad productiva del país comprometen el desarrollo de la infancia, al colocar a millones de niños en una situación de precariedad extrema por la falta de acceso a los bienes fundamentales para su supervivencia. La desnutrición infantil y la ausencia de prevención médica no sólo se cobran la vida de centenas de niños cada año, sino que también condicionan severamente las oportunidades educativas de aquellos que acceden al sistema escolar. Menos del 75% de los niños y las niñas son vacunados contra la tuberculosis; 53%, contra la difteria y el tétanos; 52%, contra la poliomielitis; 58%, contra el

sarampión, y vaya a saber cuán pocos, contra la hepatitis B.

En Haití, los derechos del niño son pisoteados cotidianamente ante la mirada indiferente de sus gobernantes y la incompetencia cómplice de algunos organismos internacionales que, como el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, han promovido políticas de ajuste que no han hecho otra cosa que profundizar las condiciones de miseria y abandono de los sectores más vulnerables de la población.

La escuela pública es casi inexistente y, como dijimos anteriormente, más del 80% de los niños y las niñas escolarizados asiste a escuelas privadas. Estas, casi siempre, poseen pésimas condiciones de infraestructura y ni siquiera pueden ser reconocidas como establecimientos escolares por los ocasionales visitantes de Puerto Príncipe. En efecto, antes del terremoto, una recorrida por las calles de la ciudad permitía identificar que decenas de escuelas funcionaban en galpones o en el segundo piso de construcciones altamente precarias, entremezcladas con viviendas y negocios, superpuestas, apelmazadas, en ruinas aun antes de que se anunciara que Puerto Príncipe había sido destruida a causa del temblor.

La escuela privada tiene un costo muy alto. Según un informe de la Coordinación Haití-Europa (Louis, 2010), el país gasta menos del 2% de su PBI en educación y el 65% de los gastos educativos son sustentados por las familias haitianas. El costo promedio de una escuela preescolar haitiana ronda los 70 dólares anuales y el de una escuela primaria, 160 dólares. Un valor desmedido en un país con un ingreso medio per cápita de 414 dólares. En otras palabras, enviar a un niño a la escuela primaria consume el 40% de la renta anual promedio de un adulto haitiano, suponiendo que posea algún tipo de ingreso. Considerando que más del 30% de la población no posee empleo formal ni informal, que no existen políticas asistenciales que financien la falta de recursos derivados de la inexistencia de una renta laboral y que sólo el 10% de las escuelas nacionales son públicas, es inevitable reconocer la trágica insignificancia del derecho a la educación para las familias más pobres en Haití.

Por otro lado, al igual que en todos los países latinoamericanos

y caribeños, los beneficios educativos, como la riqueza, se distribuyen de manera muy desigual. De los niños y las niñas que no asisten a la escuela, casi el 75% pertenece a los dos quintiles más pobres de la población, un dato que se agudiza mucho más en las zonas rurales y, particularmente, en la población femenina.

La reconstrucción de la escuela pública parecería ser una urgencia democrática y un imperativo ético en Haití, aunque no parece haberlo sido para el Banco Mundial, uno de cuyos proyectos antes del terremoto consistía en financiar la matrícula de cien mil niños que cursaban sus estudios en mil escuelas privadas de todo el país. Tampoco, ciertamente, una prioridad del gobierno nacional que, en 2006, gastó la irrisoria suma de 82,9 millones de dólares en el financiamiento educativo público, de los cuales menos de la mitad se destinó a la enseñanza fundamental. Las familias pobres haitianas que no tuvieron la suerte de contar con el subsidio aportado por el Banco Mundial debieron cargar con algo más de los 270 millones de dólares que fueron necesarios para escolarizar a sus hijos e hijas. Un dato espantoso si se considera que más de la mitad de la población sobrevive con menos de 1 dólar diario y casi el 80%, con 2 dólares; el 20% más rico concentra más del 60% de los ingresos nacionales, y el 20% más pobre, apenas el 2%. Dicho de otra forma, mientras el Estado gastó menos del 2% de su PBI en educación, las familias gastaron cerca de 9% del PBI en garantizar la escolaridad de la mitad de los niños y las niñas que asisten a la escuela. La otra mitad, simplemente, no asiste.

El primer país de América Latina que tuvo una ley de escolaridad obligatoria no establece ni garantiza, aún hoy, la gratuidad de la educación en su legislación nacional.

En este marco, el debate acerca de la calidad de la educación, de las condiciones de aprendizaje y educabilidad en las escuelas, de los procedimientos y métodos de instrucción, de los currículos y los libros didácticos puede parecer irrelevante. En Haití se gradúan poco más de trescientos cincuenta docentes por año: ¿puede hablarse aquí de algo parecido a la “formación docente”? Por su parte, el sistema universitario, altamente precario y frágil, produce profesionales que rápidamente abandonan el país, hu-

yendo a República Dominicana y, cuando es posible, a Canadá, los Estados Unidos o Francia. Casi el 85% de los haitianos con nivel superior de educación ha salido del país durante los últimos años, según datos proporcionados por el Sistema Económico Latinoamericano y del Caribe (SELA).

El enorme abismo que separa el sistema escolar haitiano de los valores y principios democráticos que hacen de la educación un derecho no parece haber sacado del autismo a gobiernos locales y agencias internacionales más proclives a ver la infancia como un mero producto de exportación, destinado a satisfacer las carencias afectivas de solidarias familias extranjeras, que como un colectivo sujeto de derechos plenos y efectivos.

El abandono se nutre de una política indiferente al sufrimiento de miles de niños y niñas que, al igual que su país, son vistos como objeto de saqueo o como chatarra de un naufragio que se hace visible ocasionalmente, apenas cuando la tierra tiembla.

CAOS Y RECONSTRUCCIÓN

El terremoto del 12 de enero de 2010 desbarató la educación haitiana, que ya se encontraba en ruinas. Escombros sobre escombros, destrucción sobre destrucción. El tamaño de los desafíos abiertos es tan enorme como las carencias que se ponían en evidencia desde antes del sismo, silenciadas por los gobiernos locales y la llamada “comunidad internacional” –hoy tan visiblemente conmovida ante la tragedia–.

Durante los días que sucedieron al desastre, un eco resonó tanto en los países industrializados como en vías de industrialización: se abre ahora la posibilidad de una reconstrucción duradera. Sin embargo, para que esto sea posible, no conviene despreciar la experiencia aportada por la mala cooperación que algunos organismos internacionales han ejercido, así como los trágicos errores que siempre ha conllevado militarizar las estrategias de ayuda externa a naciones que han sufrido desastres sociales o naturales. Así las cosas, es necesario estar atentos a las propuestas providenciales que

aportarán los sagaces y siempre listos funcionarios de los bancos solidarios o a las prepotentes acciones de guerra que aportarán ejércitos imperiales más acostumbrados a bombardear naciones periféricas que a reconstruirlas.

Aunque pueda resultar simplista proclamar que las fuerzas de la ONU deben retirarse en forma inmediata del país, sería irresponsable desistir de una evaluación estricta que determine la contribución efectiva de esas fuerzas en la pacificación y la reconstrucción de una nación en ruinas. La educación, una vez más, puede ser la clave desde la cual imaginar la edificación de un futuro de libertad y justicia para este país que iluminó los horizontes de igualdad en nuestro continente al fundar y dar sentido al abolicionismo anticolonial.

Hay que hurgar en los escombros que apiló el trágico terremoto. También en los que había antes que la tierra se pusiera a temblar. Cuando la ONU instaló la MINUSTAH, esta fuerza estaba conformada por seis mil setecientos efectivos militares, mil seiscientos veintidós agentes de policía, quinientos cuarenta y ocho funcionarios internacionales, ciento cincuenta y cuatro voluntarios de las Naciones Unidas y novecientos noventa y cinco funcionarios nacionales. Ningún maestro.

Hay que revisar, evaluar, ponderar con cuidado y con rigor el tenor de la ayuda internacional ofrecida al pueblo haitiano en materia educativa. No sólo porque la tendencia a repetir malas experiencias por parte de los organismos internacionales poco ha ayudado a satisfacer las demandas educativas de los países más pobres, sino también porque buena parte de los recursos destinados a estos programas no suele ser otra cosa que mera pirotecnia propagandística. En 2006, Haití recibía 9 dólares por año de ayuda internacional para la educación básica por cada niño o niña en edad escolar; bastante menos que República Dominicana, que recibía 32 dólares, Nicaragua, que recibía 97, o Guyana, que recibía 52.

Fueron pocos los países que, antes del terremoto, enviaron a Haití algo más que armas, blindados y ropa de batalla. Cuba, como siempre, brindó su ejemplo de solidaridad, aportando más de cuatrocientos médicos y paramédicos, que estaban instalados,

trabajando arduamente en el país el 11 de enero, víspera de la tragedia, y que contribuyeron enormemente a socorrer y auxiliar a las víctimas.

Haití precisa ayuda y la precisaba mucho antes del terremoto. Los huracanes y ciclones que asolaron el país pocos años atrás habían destruido cientos de escuelas y no se hizo mucho por ellas. Casi un centenar de niños y niñas murieron al derrumbarse una escuela en Puerto Príncipe en noviembre de 2008. Ese día la tierra no tembló. La escuela se cayó porque, como casi todas, estaba mal construida. La noticia duró pocos días en los periódicos y nadie juntó dinero para ayudar a las familias de las víctimas. Ni siquiera llamó la atención que el nombre de esta escuela fuera La Promesse. Días después, otro edificio escolar se vino abajo. El tema dejó de ser noticia porque, ya lo sabemos, lo que se repite de forma sistemática deja de ser atractivo en materia periodística. Y una vez más, todos ignoramos Haití, ejerciendo nuestra obsesión por el olvido y nuestro habitual desprecio por los más pobres del planeta.

También nos olvidamos de que, gracias a la valerosa acción de un conjunto de organizaciones de mujeres haitianas, los soldados de Sri Lanka que servían a las fuerzas de la ONU fueron expulsados de Haití por sus reiteradas violaciones a niñas indefensas, a quienes se suponía que debían ofrecer protección y seguridad, respeto y dignidad. Nos olvidamos de esas niñas y de las mujeres que valerosamente las defendieron. Myriam Merlet y Magalle Marcellin, dos de esas militantes, dirigentes de las organizaciones feministas que denunciaron el atropello, fueron algunas de las tantas víctimas fatales del terremoto del 12 de enero. ¿Quién defenderá a las niñas haitianas ahora que ellas no están y que nosotros ni siquiera llegamos a olvidarlas porque nunca las recordamos?

La violencia sexual era brutal antes del terremoto, y una de las tantas causas que explicaba el abandono escolar de las niñas haitianas. En marzo de 2008, la Brigada de Protección de Menores contaba en Haití con doce agentes en todo el país. Carecían de vehículos para su movilidad. Una catástrofe humanitaria en una nación donde la violación es y ha sido desde hace mucho tiempo

un arma política, donde diecinueve de cada cien niñas que viven en Puerto Príncipe han sido violadas (Amnistía Internacional, 2008). Una catástrofe humanitaria en un país donde casi la mitad de los hogares tiene como cabeza de familia a una mujer. Una mujer que destina casi todos sus ingresos, cuando los tiene, a permitir que sus hijos vayan a la escuela, sospechando, imaginando, soñando que allí será posible tejer un horizonte de felicidad y prosperidad.

Hay que reconstruir Haití con los haitianos, con sus organizaciones democráticas y populares. Refundar, desde su pueblo y junto a su pueblo, esa nación autónoma que no acabó de nacer porque no la dejaron. La educación puede ser una buena forma de hacerlo.

ACURRUCADAS EN LA ESPERANZA

La madrugada del 13 de enero un llanto estremeció las calles de Puerto Príncipe. Minutos antes hubiera sido absurdo intentar diferenciarlo de entre los miles de llantos que inundaban la ciudad, que bañaban con lágrimas de luto y dolor tanta muerte y tanta destrucción, ese desarraigo absoluto que se cuele por las grietas del alma y de una tierra seca que parece querer vengar todos los crímenes que se cometieron contra ella. En una pequeña tienda de campaña, en una especie de hospital improvisado sobre los escombros de la Cité Soleil, había nacido una niña. Las lágrimas de su madre iluminaban silenciosas el cielo gris de ese pequeño pedazo del mundo, donde se espejan nuestra indiferencia, nuestra impotencia y nuestra obstinación en el olvido. El llanto de la niña reinaba milagroso en las calles de Puerto Príncipe, mientras su madre la abrazaba, todavía marcada por las heridas de los escombros que la habían cubierto hasta hacía algunas pocas horas, en una escuela cercana. “Te llamarás Lu”, le dijo al oído en un *créole* dulce, amoroso. La enfermera brasileña que había asistido el parto cerró los ojos y rogó no volver a llorar desconsoladamente otra vez. La niña llevaría su nombre como forma de agrade-

cimiento. Así lo había prometido su madre. Y allí estaban ellas, abrazadas, acurrucadas, fundidas en sus lágrimas de amor y en la esperanza de un futuro que, como su patria querida, también estaba naciendo.

Haití: una vez más, pese a todo, la utopía.